

FORMULO RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL

EXCMA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Autos: "SATELITAL WORLD S.R.L. S/ QUIEBRA DECLARADA S/ INCIDENTE DE REVISION" - Expte. N°: 151/14-I8

MARIA DE LOURDES CACERES, abogado, matrícula federal tomo N° 130, folio N° 725, representante del Fisco Nacional (AFIP), a V.E. respetuosamente digo:

I). - PERSONERIA

Conforme lo acredito soy representante de AFIP-DGI, en virtud del mandato conferido por esa Administración mediante disposición N° 327/2017 (AFIP-D.G.I.), la cual se encuentra agregada en autos.

Tal como surge de la disposición precitada, mi representación responde a la necesidad de AFIP de designar nuevos representantes del Fisco Nacional para actuar en juicios universales en materia impositiva, aduanera y de los recursos de la seguridad social y a mi condición, de ser abogado de planta permanente, del Organismo Fiscal (Legajo N° 43511/59).

Por los motivos expuestos, solicito tenga por debidamente acreditada la personería invocada.

II).- OBJETO

Por este acto vengo a interponer en tiempo y forma oportuna, Recurso Extraordinario en contra de la sentencia del 03/03/2022 de la Excma. Corte Suprema

de Justicia de Tucumán, en cuanto resuelve: *“II.- DECLARAR INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por la Administración Federal de Ingresos Públicos -“AFIP”-, contra la sentencia de fecha 26/11/2020, dictada por la Sala I, de la Excma. Cámara Civil y Comercial Común, del Centro Judicial Capital. “*

III).- CONSTITUYO DOMICILIO

A los fines de la admisión formal, constituyo domicilio legal en calle Junín N° 67 piso 6 oficina “C” de la ciudad de San Miguel de Tucumán y procesal electrónico en CUIL N° 27-27751611-5.

Asimismo para el caso de que se conceda esta vía recursiva y se eleven las actuaciones a la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación, constituyo domicilio legal en calle Defensa 192, Entrepiso “B” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y procesal electrónico en CUIL N° 27-27751611-5.

IV).- PROCEDENCIA DEL REMEDIO PROCESAL INTERPUESTO. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD.

Conforme lo prevé el art 14 de la Ley 48, la sentencia que se recurre encuadraría en el punto 1) al cuestionarse la validez de normas de carácter federal resolviendo en su contrario; y en el 3) del mismo al vulnerar entre otros principios, derechos y garantías constitucionales y la inteligencia de una ley del Congreso, ya que conforme los fundamentos que informarán este recurso, la decisión adoptada resulta en contra de la validez del título, derecho y privilegio en que se funda la Ley N° 11.683 (t.o. 1998 modificaciones) y es materia de litigio, a la vez que resulta manifiestamente arbitraria la decisión adoptada.

La existencia de situaciones de gravedad institucional justifican la intervención de la Corte Suprema, superando los recaudos procesales frustratorios

del control institucional que le fue confiado. Por ello, debe ser desechada toda interpretación que, con base en el estricto apego a las formas procedimentales, produzca la impotencia del órgano judicial a cuya mejor y más justa labor aquéllas deben servir” (Del voto del Dr. Levene - CSJ, Diciembre 6-1994- Reiriz, María G. y Casal, Eduardo E. s/ Recurso Extraordinario en : Alonso, Jorge F. y otros p.177).

A continuación enumero los requisitos que la Ley Nacional N° 48 y la jurisprudencia han consagrado para la admisibilidad de esta vía. Siguiendo la clasificación usual, distingo entre requisitos formales comunes a toda clase de recursos y los propios del recurso extraordinario federal.

1) Requisitos comunes a todo recurso procesal:

a) Intervención de un Tribunal de Justicia: Se recurre una sentencia emanada de vuestra Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucumán.

b) Existencia de juicio: Nos encontramos en el marco de un caso judicial en el cual se discuten intereses jurídicos, como el reconocimiento del crédito del Fisco Nacional.

c) Cuestión justiciable: No se ventilan temáticas ajenas a la función judicial, como pudiera ser una decisión política de los Poderes Ejecutivo o Legislativo. Se cuestionan sentencias que desestiman recursos judiciales anteriores.

d) Presencia de gravamen: No puede soslayarse en este apartado que lo que se ha afectado con el dictado de la sentencia que se recurre es la integridad presupuestaria de este Organismo, por cuanto no se admite deuda legalmente determinada y exigible, mediante interpretaciones arbitrarias que contradicen la normativa legal aplicable, a la vez que no se condicen con las constancias obrantes en la causa. Es decir que con el fallo se afecta directamente el desenvolvimiento

estructural de esta AFIP y sus facultades de recaudación, fiscalización y verificación, función esencial de este Organismo de control.

e) Interés personal: se justifica con la titularidad del derecho que intenta preservar por la vía del art. 14 Ley 48. En el caso el Fisco Nacional es el titular del derecho que se intenta preservar y también la parte del proceso a quién la sentencia que se recurre perjudica, existiendo gravamen personal, concreto, actual y no imputable a esta recurrente. f) Interés jurídico: El interés defendido en este libelo se funda en normas vigentes. Es pasible de la tutela del Derecho, no tratándose de una mera discrepancia del Organismo. g) Subsistencia de los requisitos anteriores: De las constancias de autos y de la relación de los hechos surge que los recaudos anteriores continúan vigentes a la fecha.

2) Requisitos propios del recurso extraordinario:

a) Sentencia definitiva. En la presente causa la decisión del 03/03/2022 reviste indudablemente el carácter de sentencia definitiva, ya que lo resuelto en ella no resulta susceptible de modificación por ningún otro medio que no sea el presente remedio procesal, sin el cual adquirirían firmeza lo sentenciado, privando a mi representada del derecho al cobro de lo que legítimamente le corresponde.

Se trata de una sentencia que *"pone fin a la cuestión debatida en forma tal que no puede renovarse"* (fallos 137:354; 244:279 y 188:393); esto es *"...efecto de cosa juzgada sustancial"* (Sagües, Recurso Extraordinario, T.1, Depalma, Edic. 1984, pág. 292).

En síntesis, se trata de una sentencia definitiva que da por finalizado el pleito, causando gravamen irreparable.

b) Superior Tribunal de la causa. La resolución de vuestra Excelentísima Corte Suprema de la Provincia de Tucumán es la de un órgano competente para decidir en última instancia la cuestión resuelta, por lo que la única y última vía de subsanación es la del Recurso Extraordinario Federal (conf. Sagües, Nestor Pedro, Derecho Procesal Constitucional, T.2, pág. 635, Ed. Astrea Bs.As. 1992).

c) Introducción de la cuestión federal y mantenimiento en las sucesivas instancias. La cuestión federal se planteó en las sucesivas instancias de la litis: Incidente de verificación de créditos 11/04/2017 (última foja), expresión de agravios por apelación del 21/05/2019 (penúltima hoja) y casación del 23/02/2021.

Asimismo los diferentes agravios que la suscitan fueron expuestos y mantenidos en cada una de las citadas presentaciones, como también la tacha de arbitrariedad.

d) Acordada n° 4/2007 (CSJN). De la lectura del presente surge que cumple en su estilo y extensión con los recaudos de la Acordada citada. Se acompaña además la carátula prevista por la misma.

e) Forma y plazo de la presentación.

La sentencia que se recurre ha sido notificada a esta parte el 07/03/2022, mediante cédula en casillero digital de notificaciones, interponiéndose el presente recurso dentro del plazo de diez (10) días previsto por el artículo 257 del C.P.C. y C.N. Conforme art. 52 de la Acordada N° 236/20 (CSJT).

NOTIFICACIÓN POR CÉDULA A DOMICILIO DIGITAL
CONSTITUIDO: Una vez confeccionada la cédula de notificación, el/la funcionario/a del órgano judicial la firmará digitalmente y la depositará en el casillero digital constituido como domicilio digital del notificado. Es obligatorio para la parte o su

apoderada/o ingresar al “Portal del SAE” a tomar conocimiento de las cédulas depositadas en sus respectivos casilleros digitales, los tres días de comparendo obligatorio semanal fijados por la CSJT mediante Acordada N° 6803/48: Lunes, Miércoles y Viernes; o subsiguiente día hábil en caso de feriado (reglamentación art. 3 de la Ley N° 2.199). La notificación se tendrá por realizada el primer día hábil de comparendo obligatorio posterior a la fecha en que la cédula fue depositada en el casillero, debiendo quedar registrada en el sistema la fecha y hora en que la cédula fue depositada”.

Por ende el presente se encuentra interpuesto y fundado dentro del plazo de diez (10) días previsto por el artículo N° 257 del C.P.C.C.N, ante el mismo Tribunal que resolvió en autos, es decir, vuestra Excelentísima Corte.

V).- RELACIÓN DE LOS HECHOS – ANTECEDENTES DE LA CAUSA

Motiva la interposición del presente Recurso Extraordinario Federal la sentencia del 03/03/2022 de vuestra Excelentísima Corte Suprema de Justicia de Tucumán en los presentes autos.

Cumpliendo con los recaudos exigidos por el más Alto Tribunal de la Nación se realizará un breve y esquemático relato de los extensos antecedentes de la causa.

Con fecha 11/04/2017 ésta AFIP promueve incidente de verificación de créditos solicitando la verificación de la deuda post-concursal generada por la fallida.

En consecuencia, el A quo resuelve mediante sentencia de fecha 22/04/2019 que: *“I°. HACER LUGAR parcialmente al incidente de verificación de crédito promovido por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en los términos del*

art. 202 de la L.C.Q., por lo considerado. En consecuencia, DECLARAR ADMISIBLE la suma de \$10.369.317,77, de los cuales, \$7.065.364,48 responde a capital, los que son admitidos con privilegio general (art. 246 inc. 2 y 4 L.C.Q.), y \$3.303.953,29 a intereses los que son admitidos como quirografarios (art. 248 L.C.Q.)”

En contra del resolutorio que antecede se interpone Recurso de apelación y se expresan los agravios que la misma produce mediante presentación de 21/05/2019.

El 20/11/2020 la Excma. Cámara resuelve **“I.- NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto a fs. 464/465 por la Dra. Maria Lourdes Cáceres en representación de AFIP- DGI, contra la sentencia de fecha 22/04/2019 (fs. 450/457). II.- COSTAS, como se consideran.”**

Considerando ésta representación que la sentencia en crisis no reúne fundamentos suficientes para declarar la improcedencia del crédito fiscal y no existiendo en dicho fallo una adecuada interpretación de las actuaciones administrativas que dieron lugar a las multas, es que en legal tiempo y forma se interpone recurso de casación para que proceda esa Excma. Corte a restablecer el sistema de justicia vulnerado por el A Quo.

En virtud de ello, de los errores en el razonamiento que contiene la sentencia emitida por el A quo, que fuera notificada a mi parte en casillero de notificaciones en fecha 10/02/2021, es que en 24/02/2021 se interpone recurso de casación para que proceda esa Excma. Corte a restablecer el sistema de justicia vulnerado por el A quo.

En fecha 03/03/2022 la Excma. Corte Suprema de Justicia resuelve: **“II.- DECLARAR INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por la Administración**

Federal de Ingresos Públicos -“AFIP”-, contra la sentencia de fecha 26/11/2020, dictada por la Sala I, de la Excma. Cámara Civil y Comercial Común, del Centro Judicial Capital. “

VI).- REFUTACIÓN DE TODOS Y CADA UNO DE LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO DEL 03/03/2022

Motiva el presente recurso la sentencia definitiva del 03/03/2022, por tratarse de un fallo desprovisto de fundamentos válidos de rechazo, limitándose a expresar: *“En este orden de ideas, el planteo casatorio carece de los indispensables desarrollos tendientes a poner de manifiesto el error y/o la ilegitimidad de la sentencia en crisis. Por lo tanto, se está en presencia de un recurso de casación que, en puridad, se motiva en una mera discrepancia de la recurrente con la resolución del Tribunal de Alzada, sin haber aportado argumentos idóneos para justificar la arbitrariedad de lo decidido”.*

De la lectura de la sentencia en crisis, surge con claridad que V.E. se limita a expresar que mi parte simplemente discrepa con las valoraciones fácticas y probatorias realizadas por los tribunales de las instancias anteriores. Sin embargo, mi parte requiere que el juzgador realice un análisis INTEGRAL del crédito, evaluando su procedencia conjuntamente con la documentación arrimada y aplicando la normativa específica en la materia, lo cual fue objeto de oportuna crítica y refutación. PIDO SE TENGA PRESENTA.

Por otro lado la sentencia dice: *“ Puesto que, a través de este recurso, no se procura revisar la justicia material de las sentencias de tribunales de grado, sino el restablecimiento del imperio de la ley a través de la correcta hermenéutica por consideraciones de interés público, vinculados con la seguridad jurídica, por sobre los intereses de las partes en un litigio singular (CS, San Luís, 19/03/2018, “Díaz, Javier E. c/ Prevención Aseguradora s/ Riesgos del Trabajo S.A. s/ Recurso de casación”, La Ley, cita online: AR/JUR/14057/2018). ”* Justamente, se recurre a esta instancia extraordinaria a fin de demostrar que los fallos anteriores adolecen de una arbitrariedad

manifiesta, atento que los mismos se basan en fundamentos genéricos, alejados de una valoración correcta de la documentación aportada y de un análisis adecuado a la normativa aplicable, lo que conlleva a vulnerar el derecho de defensa de mi representada.

Al contrario de lo sostenido, ésta AFIP desde el inicio demostró la firmeza y exigibilidad del crédito insinuado y en tal sentido, se aportó toda la documentación suficiente para justificar la procedencia del mismo. Además, se explicó en cada etapa que las situaciones particulares de cada crédito que se insinuó, los cuales se encuentran contemplados y reglamentados por normas particulares y específicas que corresponden aplicarlas al momentos de su estudio, sin embargo en todas las instancias se dejaron de lado las explicaciones esgrimidas por ésta representación y resolvieron en base a normas generales que no se aplican a los casos particulares que nos ocupa, tornando los mismos en fallos de una ARBITRARIEDAD MANIFIESTA POR UNA INCORRECTA HERMENÉUTICA DE LAS CONSIDERACIONES Y DE LA NORMATIVA ARRIMADAS AL PROCESO. En tal sentido, se dijo:

- Multas RG 1566: En tal sentido, se observa que tanto el A quo como la Excma. Cámara no contempla la naturaleza jurídica de las multas previsionales de la RG 1566, tampoco se tuvo presente la documentación (DD.JJ., notificación), pues en fecha 15/11/2016 se notificaron las mismas, acreditando de esta manera su firmeza. No obstante todo lo abrado conforme a derecho, no se puede argumentar que no se respetó el derecho de defensa de la Concursada, ya que éstas multas fueron intimadas a la fallida. Se comunicó que tenía la posibilidad de impugnar las sanciones aplicadas, interponiéndose los recursos previstos en el art. 11 de la Ley N° 18.820 y art. 11 de la Ley N° 21.864 dentro de los plazos previstos indicados en los mismos (15 y 5 días respectivamente) situación esta que no sucedió.

Entre la documentación aportada, se adjuntaron las intimaciones realizadas a la firma en la cual se comunica que de las constancias obrantes en esta Administración Federal, surge que no se ha dado cumplimiento a la cancelación del saldo de la declaración jurada (autodeclarada) dentro del vencimiento general, hecho que constituye una infracción que le hace pasible de la sanción prevista en el art. 8 de la Resolución General N° 1566, texto sustituido en 2010 y modificaciones.

- Respecto a las declaraciones juradas de Aportes y contribuciones P.F. 04/2014 se aparta arbitrariamente de la normativa específica de la materia, vulnerando el principio de validez de los actos auto-declarados por la Concursada. En tal sentido, no se puede desconocer lo establecido por la RG 4066/17. Resulta arbitrario que las sentencias de las primeras instancias no hayan acogido las explicaciones y pruebas que se arrió, tornando jurídicamente peligrosos sus resolutivos, ya que parten del análisis parcializado de la prueba y despojados de legalidad.

Pues en el caso nos encontramos ante un crédito que surge de una DD.JJ. que la Contribuyente (ahora Fallida) rectificó en menor valor y que no cumplió con la normativa vigente para que ésta Administración la acepte y conforme. Ante esto, se procedió a solicitar la verificación del valor de la DD.JJ. VIGENTE, es decir la “original”.

-Por último, respecto al crédito de Multa aplicada por el periodo 2009 del Impuesto a las Ganancias se advierte que no se tuvo presente al momento de rechazar el crédito, que el crédito quirografario, por Multa – Impuesto a las Ganancias 2009, aplicada en el marco del Sumario N° 355340 corresponde a un periodo Concursal, y por tal motivo se formuló la siguiente reserva en el expediente principal, el cual fue decretado el 17 de febrero de 2016:

“I) Téngase presente la reserva formulada por la A.F.I.P.. A conocimiento de los interesados. II) Atento que el letrado apoderado de la A.F.I.P., quien se ha apersonado en la incidencia Nro. 151/14-I2, se presenta con el patrocinio del letrado Pablo Alejandro Salomón, respecto del cual no se han repuestos los recaudos de ley que le son exigibles, proceda este último en el término de cinco días a reponer dichos recaudos bajo apercibimiento de no darle intervención al mismo en el carácter antes aludido. PMRB”

Respecto a éste crédito se dijo:

“...En efecto, dicha acreencia solo puede incorporarse a la quiebra indirecta (declarada el 10/03/2016) por vía de verificación tardía (art. 56 LCQ), invocando razones fundadas que hayan impedido su insinuación tempestiva en el concurso. Estas circunstancias no han sido alegadas por la recurrente, quien se limitó a reiterar que la causa de la multa era de índole concursal, sin rebatir el argumento sentencial por el cual se declaró inadmisibile la multa insinuada. En consecuencia, el agravio materia de análisis no puede prosperar”.

De la lectura surge que los juzgadores realizan un resolutorio que parte de un análisis parcializado que no evalúa íntegramente las circunstancias particulares de ésta acreencia. En tal sentido, cabe reiterar que se trata de un periodo Concursal, que se encontraba en discusión al momento de presentación del Concurso. Asimismo, una vez cumplido el plazo bienal establecido por el Art. 56 de la Ley 24.522 el proceso administrativo no había concluido, motivo por lo cual ésta AFIP procedió a informar la existencia del crédito a fin de resguardar su futura admisibilidad.

En esta línea de pensamiento se ha dicho que la tacha de arbitrariedad requiere que se invoque y demuestre la existencia de vicios graves en el pronunciamiento judicial consistentes en razonamientos groseramente ilógicos o contradictorios, apartamiento palmario de las circunstancias del proceso, omisión

de considerar hechos y pruebas decisivas o carencia absoluta de fundamentación (L.S 188-446, 209-348, etc).

Ocorre que no solamente la sentencia es arbitraria cuando no se brinda explicación alguna sino cuando la misma resulta aparente. En tal sentido, el fallo se limita a expresar: *“En este orden de ideas, el planteo casatorio carece de los indispensables desarrollos tendientes a poner de manifiesto el error y/o la ilegitimidad de la sentencia en crisis. Por lo tanto, se está en presencia de un recurso de casación que, en puridad, se motiva en una mera discrepancia de la recurrente con la resolución del Tribunal de Alzada, sin haber aportado argumentos idóneos para justificar la arbitrariedad de lo decidido”*

Con esta afirmación queda en claro que tampoco en la instancia casatoria existió un análisis de los fundamentos esgrimidos por AFIP para demostrar la exigibilidad del crédito, limitándose a rechazar el recurso interpuesto sin emitir las razones del rechazo, recurriendo solo a argumentaciones genéricas y no aplicables a la cuestión debatida. Pues de las distintas presentaciones realizadas por mi mandante surge que no se trató de revertir la sentencia por una mera discrepancia con lo resuelto, o criticar las conclusiones de hecho, sino en demostrar que el crédito insinuado se encuentra reiterar que las instancias

Por ello concluyo que, en el fallo que en esta oportunidad se ataca, no existe una valoración de la prueba ni un análisis de la ley aplicable, porque no se estudiaron los elementos aportados, ni los hechos y DERECHO invocados y luego se resuelve con mérito en su supuesta inexistencia.

Cabe citar el precedente de la CSJN “FIMACO S.A. c/ s/CONCURSO PREVENTIVO - INCIDENTE DE REVISIÓN PROMOVIDO POR ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS -CAUSA N° 176/01-”, F. 1168. XLII. RHE19/04/2011, Fallos 334:427:

“Cabe revocar la sentencia mediante la cual la Corte local desestimó el recurso de Inconstitucionalidad con fundamento en que la normativa federal había sido aplicada y que la naturaleza del proceso verificadorio no eximía a la AFIP de la obligación de justificar el crédito, pues el a quo justificó el examen de la validez intrínseca del título del crédito en el fuero concursal mediante afirmaciones dogmáticas y pautas de excesiva laxitud, en sustitución de normas federales aplicables, omitiendo dar respuesta al planteo referido al desconocimiento del procedimiento tributario administrativo y judicial aplicable al caso (Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema)”.

Así se presenta en autos situación similar a la del fallo de la CSJN “González, Jorge Enrique s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 43.787 y 43.793”, CSJ 004490/2015/RH001 del 08/10/2020:

“Es arbitraria la sentencia del superior tribunal provincial que hizo propias las ostensibles deficiencias argumentativas de los decisorios del tribunal de mérito y de casación y, al amparo de un excesivo rigor formal y con base en expresiones dogmáticas y sin contenido, desatendió los antecedentes que hacen a la cuestión fáctica sustancial de la causa y el adecuado estudio de elementos conducentes obrantes en la misma”.

A su vez el 28/08/2018 el Supremo Tribunal de la Nación se expidió en este sentido en “AFIP - DGI c/ Tajamar Sistemas Electrónicos S.A. s/ ejecución fiscal – AFIP”, FCB 054168/2015/CS001, Fallos: 341:1010:

“Si bien las objeciones a las sentencias, relativas a la aplicación de normas de derecho común y procesal y la apreciación que efectúan de las cuestiones de hecho y prueba son ajenas, por principio, al recurso extraordinario, cabe admitir su procedencia en aquellos supuestos donde el acto jurisdiccional carece de los requisitos que lo sustenten válidamente como tal, en razón de la arbitrariedad manifiesta derivada del apartamiento de constancias comprobadas de la causa o de la inclinación a favor de una prueba valorada en forma parcial, fuera de contexto y en forma desvinculada con el resto de ellas”.

Manteniéndose el agravio de mi parte, y encontrándose vulnerado el derecho que la inviste, es que se solicita se habilite el remedio extraordinario federal con el objeto de restablecer la justicia del caso.

**CUESTION FEDERAL - RECURSO EXTRAORDINARIO -
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.**

Al respecto de la posibilidad de abrir la vía extraordinaria de excepción, fundada en arbitrariedad de sentencia, esa Excma. Corte tiene dicho que:

“... La arbitrariedad no es una cuestión a decidir que debe ser introducida, sino el defecto de invalidez jurisdiccional del que resguarda el art. 18 de la Constitución Nacional y que siempre ha de nacer, de modo indefectible, con el dictado del acto inválido”. Contreras Raul Osvaldo y otros c/ Ferrocarriles Metropolitanos S.A. 24/04/2001 Fallos 324:1344

Es decir que procede el recurso extraordinario, no obstante tratarse de aplicación de normas procesales o de derecho común y de cuestiones de hecho, cuando la sentencia recurrida es arbitraria y carente de fundamento jurídico pues no sólo hay arbitrariedad cuando se resuelve contra; o con prescindencia de lo expresamente dispuesto por la ley respecto al caso, sino también cuando se prescinde de pruebas fehacientes, regularmente traídas a juicio.

La sentencia casatoria de fecha 03/03/2022 resulta evidentemente arbitraria. Reiteradamente ha señalado VE. Corte que las sentencias deben ser fundadas, es decir que deben ser una derivación razonada del derecho vigente, con relación a los hechos comprobados de la causa, y no un producto de la mera voluntad del juez. Han sido descalificadas, por lo tanto, aquellas sentencias en que no se efectúa un concreto análisis del derecho aplicable y de las constancias probatorias de la causa, limitándose el sentenciante a dar alguna pauta meramente dogmática para fundar el fallo. También

se ha dicho que, en estos casos, las sentencias sólo cuentan con fundamentación aparente.

Es condición de validez de las sentencias judiciales que ellas sean fundadas y que constituyan, por tanto, derivación razonada del derecho aplicable, con referencia a los hechos comprobados de la causa, exigencia que no cumple el fallo impugnado en cuanto se apoya en una afirmación dogmática para resolver un punto controvertido de derecho, sin analizar las circunstancias concretas del caso y las específicas de la legislación aplicables ni las argumentaciones de los afectados por las medidas impugnadas. (LL 1980-A, 641 [35.410-S]).

Las cuestiones referentes a la selección de las pruebas y su interpretación y evaluación por los jueces son, por principio, ajenas a la órbita del recurso extraordinario. Sin embargo, el mismo ha sido considerado viable en aquellos supuestos en que se ha omitido toda consideración sobre pruebas evidentemente decisivas para la solución del caso, o cuando se las ha interpretado de manera caprichosa. En el caso, falta de merituación de la prueba existente en autos y de las justificaciones brindadas por el Fisco Nacional.

Los fundamentos brindados en la sentencia casatoria denotan claramente **arbitrariedad** en la conformación de la misma. Escudándose en citas jurisprudenciales y construcciones dogmáticas, se llega a confirmar un fallo que a todas luces resulta arbitrario e infundado.

La casación cumple con todos los recaudos legales exigidos por la norma procesal, en el sentido de que: Se basta así mismo, se efectuó una concreta descripción de los puntos materia de agravios; se cita las normas consideradas que infringe el fallo atacado; y propone la doctrina legal, en el caso: Sentencia Arbitraria, no se ajusta a derecho y no efectúa un análisis de la totalidad de los antecedentes documentales y fundamentaciones brindadas que tienen incidencia directa sobre la resolución del caso.

Por los motivos señalados, podemos concluir que el fallo que se recurre es producto de una voluntad deliberada que contradice los elementos obrantes en la causa, todo lo cual hace que nos encontremos frente a un pronunciamiento descalificable como acto jurisdiccional válido (ilegal e injusto).

Conforme lo viene sosteniendo la doctrina y jurisprudencia mayoritaria, *no solo hay arbitrariedad cuando se resuelve en contra, o con prescindencia de lo expresamente dispuesto por la ley, sino también cuando se aparta de los actos y constancias obrantes en el expediente, vulnerando el derecho defensa.*

Resulta idóneo para tener por planteada la arbitrariedad los vicios de razonamiento señalados toda vez que la sentencia debe ser la derivación razonada del derecho vigente y de las constancias inscriptas en la presente causa. “... *la base de la doctrina de la arbitrariedad (...) tiende a resguardar la garantía de la defensa en juicio y el debido proceso, al exigir que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación de las circunstancias comprobadas de la causa* (Fallos 328:4580 y 331:1090, entre muchos otros)”.

Que en tales condiciones media relación directa e inmediata entre lo decidido y las garantías invocadas de propiedad, defensa en juicio y debido proceso que tutelan los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional, por lo que corresponde su descalificación como acto jurisdiccional válido (art. 15 de la ley 48)”.

Se tiene establecido que “ una sentencia que presenta graves defectos de fundamentación respecto de la valoración de la prueba” debe descalificarse como acto jurisdiccional válido. Es decir, que las circunstancias y hechos hasta aquí denunciados, ameritan por sí, la intervención y admisión del presente remedio extraordinario. PIDO SE TENGA PRESENTE

Manteniéndose el agravio de mi parte, y encontrándose vulnerado el derecho que la inviste, es que se solicita se habilite el remedio extraordinario federal con el objeto de restablecer la justicia del caso.

Así las cosas el fallo desestima el recurso de casación por considerar que no se demostró la arbitrariedad del decisorio de Cámara, sin advertir que a la fecha ninguna de las instancias abordó argumentos relevantes para la solución del pleito como lo es la existencia de notificaciones de las multas RG 1566 que fueron rechazadas justamente por carecer de la misma.

En su mérito y por los motivos que informarán este recurso extraordinario, demostraremos que la ARBITRARIEDAD se encuentra configurada y afectada la CUESTIÓN FEDERAL.

VII).- CUESTION FEDERAL

Esa Excma. Corte de Justicia tiene dicho en numerosos precedentes que *“El objeto del recurso extraordinario es **el mantenimiento de la supremacía constitucional** y no la sumisión a la Corte de cualquier causa en que pueda existir agravio o injusticia a juicio del recurrente (Fallos 194:220), ya que aquél no se propone rectificar toda injusticia que pueda existir en el fallo apelado, sino mantener como queda dicho, la supremacía nacional (Fallos 235:972; 247:173)*

“En efecto, desde antiguo ha sido un supuesto imprescindible para la viabilidad del recurso del art. 14 de la ley 48 que la cuestión federal haya sido resuelta en forma contraria al derecho federal invocado, conforme a la fuente que inspiró el contenido de este recurso de excepción, desde que como siempre se dijo la razón de ser de esta apelación excepcional radica en la necesidad de asegurar la supremacía de la constitución, tratados y leyes nacionales que consagra el art. 31 de la C.N”. Dictamen del Procurador General

Fallo “ Recurso de hecho deducido por Eduardo Rodriguez Lemos, Fiscal de Estado de la Provincia de Mendoza y Pedro Garcia Espetxe por el Poder Ejecutivo de la provincia en la causa Gigena Julio Cesar y otros c/ Provincia de Mendoza”.

Existe cuestión federal por que los jueces que entienden en el proceso concursal, en un contexto resguardado de derecho; es decir contemplando el debido proceso para todas las partes del litigio, se encontraría sólo atenuada y sujeta al control judicial de legalidad del procedimiento, constitucionalidad de la norma y el ejercicio del derecho de defensa del administrado, cuestiones que no fueron controvertidas o cuestionadas en autos.

En el presente, existe cuestión federal por que una de las partes afectadas es el Estado Nacional, se debate el alcance del procedimiento tributario nacional, y a su vez, se afecta su fuente principal de ingresos, debidamente consagrada y protegida en el artículo 4 de la Constitución Nacional.

El recurso extraordinario resulta formalmente procedente toda vez que se ha puesto en tela de juicio la validez de un acto de autoridad nacional y la decisión ha sido contraria a tal validez (art. 14 inc 1 ley 48) autos “Rodriguez Varela, Florencio c/ Corte Suprema de Justicia de la nación s/ordinario”23/12/1992.

Es decir que de las probanzas de autos, puede V.E. cotejar que el procedimiento tramitado es legítimo, las normas involucradas son constitucionales, y se resguardó el derecho de defensa y el debido proceso.

Por ello, los fundamentos brindados en la sentencia casatoria denotan claramente -tal como lo expondré- arbitrariedad en la conformación de la misma.

El recurso extraordinario planteado resulta formalmente admisible por hallarse en discusión la validez de un acto de autoridad nacional, así como el

alcance de normas que integran el marco regulatorio de la percepción de impuestos nacionales, de carácter federal y la decisión del tribunal superior de la causa fue contraria al derecho que la apelante funda en ellos (art. 14 inc 3 de la ley 48) y al encontrarse controvertido el alcance que cabe asignar a una norma de derecho federal.

VIII) SENTENCIA ARBITRARIA:

Al respecto de la posibilidad de abrir la vía extraordinaria de excepción, fundada en arbitrariedad de sentencia, esa Excma. Corte tiene dicho que:

“.. La arbitrariedad no es una cuestión a decidir que debe ser introducida, sino el defecto de invalidez jurisdiccional del que resguarda el art. 18 de la Constitución Nacional y que siempre ha de nacer, de modo indefectible, con el dictado del acto inválido”. Contreras Raul Osvaldo y otros c/ Ferrocarriles Metropolitanos S.A. 24/04/2001 Fallos 324:1344.

Es decir que procede el recurso extraordinario, no obstante tratarse de aplicación de normas procesales o de derecho común y de cuestiones de hecho, cuando la sentencia recurrida es arbitraria y carente de fundamento jurídico pues *no sólo hay arbitrariedad cuando se resuelve contra; o con prescindencia de lo expresamente dispuesto por la ley respecto al caso, sino también cuando se prescinde de pruebas fehacientes, regularmente traídas a juicio.*

La sentencia casatoria de fecha 03/03/2022 resulta evidentemente arbitraria. Reiteradamente ha señalado VE. Corte que las sentencias deben ser fundadas, es decir que deben ser una derivación razonada del derecho vigente, con relación a los hechos comprobados de la causa, y no un producto de la mera voluntad del juez. Han sido descalificadas, por lo tanto, aquellas sentencias en que no se efectúa un concreto análisis del derecho aplicable y de las constancias

probatorias de la causa, limitándose el sentenciante a dar alguna pauta meramente dogmática para fundar el fallo. También se ha dicho que, en estos casos, las sentencias sólo cuentan con fundamentación aparente.

Los fundamentos brindados en la sentencia casatoria denotan claramente arbitrariedad en la conformación de la misma. Escudándose en citas jurisprudenciales y construcciones dogmáticas, se llega a confirmar un fallo que a todas luces resulta arbitrario e infundado.

La casación cumple con todos los recaudos legales exigidos por la norma procesal, en el sentido de que: Se basta así mismo, se efectuó una concreta descripción de los puntos materia de agravios; se cita las normas consideradas que infringe el fallo atacado; y propone la doctrina legal, en el caso: Sentencia Arbitraria, no se ajusta a derecho y no efectúa un análisis de la totalidad de los antecedentes documentales y fundamentaciones brindadas que tienen incidencia directa sobre la resolución del caso.

Por los motivos señalados, podemos concluir que el fallo que se recurre es producto de una voluntad deliberada que contradice los elementos obrantes en la causa, todo lo cual hace que nos encontremos frente a un pronunciamiento descalificable como acto jurisdiccional válido (ilegal e injusto).

Es decir, que las circunstancias y hechos hasta aquí denunciados, ameritan por sí, la intervención y admisión del presente remedio extraordinario. Pido se tenga presente.

IX.-) GRAVEDAD INSTITUCIONAL

Surge evidente, conforme a los argumentos que se han expresado, que con la sentencia que se recurre, se excede ampliamente el interés del Estado

Nacional y del Fisco Nacional, ya que la misma pone en juego la política de recaudación fiscal, en permanente lucha contra la evasión fiscal, y obsta cumplir con la procura del bien común o bienestar general.

La misma impide además, al prescindir del espíritu de la norma, no sólo la adecuada defensa en el ámbito del proceso, sino también de cumplir con probidad y prontitud la función recaudatoria.

“Debe considerarse viable el recurso extraordinario del art. 14 de la ley 48, pese a que el debate versa sobre una norma de índole procesal ajena a dicha apelación, cuando la cuestión debatida afecta directamente a la comunidad al incidir en la percepción de los tributos”. (CS, diciembre 3- 1991) ED, 148-382. En el caso se configura un supuesto de excepción en tanto la cuestión en debate excede el interés individual de las partes y afecta el de la comunidad en razón de su aptitud para incidir en la gestión de las finanzas del estado y en la percepción de la renta pública (Fallos: 314:1714; 315:683; 316:3019; 318:1413, entre otros). Ricardo Sahab en su libro “El recurso extraordinario por gravedad institucional”, Ediar, Buenos Aires, 1978, página 54 y siguientes, expone situaciones relevantes en las que la jurisprudencia ha meritado la existencia de gravedad institucional: la prestación de servicios públicos (fallos 182:293; 183:181 y 452; 256:517; 246:376; 253:406; 240:242; 268:126; 249:119; 247:512; 251:218; 266:81 y 526; 259:43) y los casos que atañen a la Hacienda y a la percepción de la renta pública (fallos 240:86; 255:41; 259:413).

Consentir el fallo en crisis es poner en riesgo todo el Sistema Tributario, y el derecho de mi mandante de exigir lo que el ordenamiento jurídico establece, lo que a su vez, podría proyectarse sobre otros casos similares.

Asimismo se ha objetado la validez e inteligencia de normas de carácter federal (leyes N° 19.549 y 11.683), la sentencia ha sido contraria al derecho que mi

parte esgrime (art. 14, inc. 1 y 3, de la ley 48), incurriendo en arbitrariedad manifiesta. Encontrándose afectado el bien jurídico tutelado por AFIP, es decir, las Rentas Públicas (art. 4 C.N.), el derecho de defensa (art. 18 C.N.), el de propiedad (art. 17 C.N.), y por mediar gravedad institucional solicito la intervención de esa Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación a efecto de restablecer el derecho vulnerado impropiaamente.

X).- PETITORIO

Por las razones expuestas a la Excma Corte Suprema de Justicia, pido:

1) Se tenga por interpuesto el Recurso Extraordinario Federal en tiempo y forma y por constituido domicilio legal y procesal.

2) Previo traslado de ley, se conceda el presente recurso extraordinario, de conformidad a lo expuesto y se ordene la elevación de los autos a la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación.

3) Se tengan por cumplidos los recaudos de admisibilidad, se declare admisible el recurso interpuesto y, oportunamente, se revoque la sentencia de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucumán del 03/03/2022.

4) Oportunamente, solicito a la Corte Suprema de Justicia de la Nación haga lugar al remedio federal, revoque el decisorio apelado, al resultar contrario a las normas federales invocadas (art. 14 punto 1 y 3 de la ley N° 48), además de arbitrario por no analizar las pruebas y fundamentos conducentes, concurriendo además gravedad institucional, por lo cual corresponde que el Alto Tribunal resuelva directamente el caso y admita en el pasivo concursal las acreencias que por ley corresponden (art. 16 de la ley).

Proveer de conformidad por ser.-

JUSTICIA